

“La economía del bien común”, por Jean Tirole

José María López Jiménez

Resumen: En este artículo se repasa la obra del Nobel de Economía Jean Tirole, recogida, en síntesis, en su obra “La economía del bien común”.

Palabras clave: Jean Tirole; Nobel de Economía; regulación; mercados.

Códigos JEL: A10; B00; G1; G3.

Jean Tirole recibió en 2014 el Premio Nobel de Economía gracias a sus aportaciones sobre los mercados y regulación, a las relaciones entre el Estado y las empresas y a la gobernanza de estas. Acceder a la obra escrita de un autor de este prestigio puede ser doblemente arduo: primero, por su profundidad, y segundo, pero relacionado con lo anterior, por el carácter técnico de la producción científica.

Por lo tanto, es de agradecer que este galardonado, a través de su obra “La economía del bien común” (Penguin Random House Grupo Editorial, S.A.U., Barcelona, mayo de 2017), se esfuerce por transmitir a los no especialistas los puntos más destacados de su propia creación, pues, más allá de los aspectos cuantitativos y de las fórmulas más farragosas, hay ideas a las que se puede llegar, simplemente, guiados por un buen maestro, como un Virgilio en “La Divina Comedia”, y con algo de intuición. Para Tirole, de hecho, la economía es exigente, y, una vez que se desenmascaran las trampas, asequible.

En nuestra experiencia de visitante de la Economía desde otras disciplinas sociales (Tirole también se refiere, reiteradamente, a la figura del “free-rider”) compartimos lo que afirma este Premio Nobel y rechazamos que, como afirmó Thomas Carlyle, nos hallemos ante la “ciencia lúgubre”, sino más bien todo lo contrario.

Tirole ha sentido la tensión entre su faceta académica y la divulgativa. En el capítulo 1 del libro escribe que no se le pedía a Adam Smith que hiciera previsiones, redactara informes, hablara por televisión, llevara un blog y escribiera manuales de divulgación: todas esas demandas sociales son legítimas, pero con frecuencia cavan un foso entre los creadores del saber y sus transmisores.

El libro se divide en 17 capítulos y está antecedido por un prólogo del autor, que parece ser la única parte de la obra escrita ex profeso, dado que el resto no deja de ser una síntesis, agrupada por materias, de los trabajos del autor, solo o en coautoría.

Los 17 capítulos se agrupan en cuatro partes: economía y sociedad (capítulos 1 y 2); la profesión de investigador en economía (capítulos 3 a 5); el marco institucional de la economía (capítulos 6 a 12); y el desafío industrial (capítulos 13 a 17).

El prólogo, en la línea de los grandes filósofos, comienza con una interpelación del autor al lector: “¿qué ha sido del bien común?”.

Para Tirole, la economía de mercado se ha convertido en el modelo dominante, por no decir exclusivo, de organización de nuestras sociedades, aunque esta victoria de la economía de mercado lo ha sido a medias, pues no se ha ganado a la totalidad de la gente común. La indignación puede ser mala consejera, pues, en el pasado, ha llevado con demasiada frecuencia a afirmar preferencias individuales en detrimento de la libertad de los demás y, por lo general, evita una reflexión en profundidad.

El conocimiento económico se considera como esotérico, aunque hasta fecha bien reciente, en el siglo XIX, formaba parte de las ciencias humanas y sociales, y, por tanto, gozaba de un reconocimiento más generalizado.

Tirole no es ajeno a estos tiempos revueltos en Francia, país que absorbe, por cierto, una buena parte de las reflexiones del autor. Algunas las seguimos con dificultad por nuestro desconocimiento de los entresijos de la sociedad gala, pero otras son perfectamente entendibles desde nuestro país, dada la identidad de nuestros sistemas sociales y políticos y los problemas comunes que laten tras el fenómeno globalizador.

Se propone revisitar la realidad social para analizarla con las lentes de los incentivos económicos, que nos pasan desapercibidos pero que definen en buena medida nuestro comportamiento. Nuestro autor afirma abiertamente que está cautivado por la economía desde los 21 o 22 años, cuando asistió a su primer curso de esta disciplina, pues esta combina el enfoque cuantitativo con el estudio de los comportamientos humanos, individuales y colectivos.

El hilo conductor de la obra es la teoría de la información: las decisiones de los actores económicos están condicionadas por la limitada información de que disponen, criterio que, aplicado a toda la riqueza de las relaciones económicas y sociales, puede aportar interesantes descubrimientos y explicaciones de nosotros mismos y de lo que hacemos.

La economía, por tanto, puede ser útil, pues no está ni al servicio de la propiedad privada y los intereses individuales, ni al de los que querrían utilizar el

Estado para imponer sus valores o hacer que sus intereses prevalezcan. Rechaza tanto la supremacía del mercado como la del Estado. La economía está al servicio del bien común; su objetivo es lograr un mundo mejor.

Tras este apartado introductorio los siguientes epígrafes tratarán brevemente sobre las reflexiones de Tirole que, para cada uno de los 17 capítulos de la obra, nos han parecido más interesantes.

¿Le gusta la economía?

Tirole se propone dar una mayor difusión a la cultura económica. La enseñanza de la economía se basa a menudo en la teoría de la elección racional, en individuos que actúan en favor de su propio interés. Pero el individuo no siempre dispone de la información suficiente, y, víctima de sesgos cognitivos, puede equivocarse al evaluar cómo alcanzar su objetivo. Por ello, empleamos a diario “heurísticas”, como nos ha enseñado el psicólogo Daniel Kahneman, galardonado con el Premio Nobel de Economía en 2002, es decir, atajos de razonamiento que nos proporcionan un esbozo de respuesta a nuestras preguntas.

En relación con los sesgos, Tirole presta atención al “sesgo de la víctima identificable”, por el que la inclinación natural es sentir compasión por las personas de nuestra comunidad que pasan por dificultades económicas antes que por los niños que mueren de hambre en África, aunque intelectualmente reconozcamos que estos necesitan más de nuestra ayuda. Damos más importancia a las personas a las que podemos poner cara que a las anónimas.

En cuanto a los mercados, estos son la forma predominante, que no la única, para gestionar la natural escasez de recursos, gracias, sobre todo, a que revelan una información vital para la correcta asignación de recursos. Otras formas históricas de gestionar esta escasez han sido —y, en ocasiones, quizás demasiadas, aun son— las colas de espera, el sorteo, el reparto de bienes por el Estado o el establecimiento de precios por debajo del nivel que equilibraría la oferta y la demanda, la corrupción o el favoritismo, la violencia y las guerras...

Algunos de estos mecanismos alternativos al mercado son intrínsecamente injustos y pueden generar una mala asignación de recursos cuya cantidad es fija. Esta mala asignación supone que estos recursos no irán a parar necesariamente a las manos de los demandantes que los aprecian más. Un método alternativo al mercado que se está imponiendo en algunos sectores, como el de las telecomunicaciones, es el de la subasta, pues las licitaciones son un medio eficaz de garantizar que las licencias se asignen a los actores que más las valoran, a la vez que se recupera para la colectividad el valor de recursos escasos.

El Estado solo en contadas ocasiones dispone de la información necesaria para decidir por sí mismo la asignación de bienes y servicios, por lo que, a pesar de su potencialidad, debe aceptar con humildad sus límites. Un exceso de confianza en su capacidad de tomar decisiones de política económica, unido a la voluntad de mantener el control, y, por tanto, a la capacidad de hacer favores, puede llevar a la adopción de políticas nefastas, por ejemplo, en los ámbitos laboral o medioambiental.

El electorado se siente angustiado en un mundo en el que una figura anónima como el mercado prima, pues busca rostros que le protejan, lo que no debería ser obstáculo para admitir que los gobernantes no son superhombres. Sin embargo, hay que apoyar a los políticos, porque la adopción de decisiones requiere mucho valor, sobre todo si son impopulares y pueden provocar el castigo electoral.

Precisamente, los populismos, tanto de derecha como de izquierda, surgen bien de los prejuicios, bien de la ignorancia de los ciudadanos electores. Para Tirole, es asombroso constatar el desprecio de los programas populistas hacia los mecanismos económicos más elementales. Un ejemplo se aprecia, en su opinión, en el “Brexit” asociado al referéndum de 23 de junio de 2016, que se basó, especialmente, en las percepciones de los británicos del fenómeno de la inmigración.

Los límites morales del mercado

Consagrado el mercado como el mejor foro, a falta de otras alternativas, para el intercambio, Tirole reflexiona sobre otro tema recurrente: sus límites morales.

De entrada, el mercado le merece una buena valoración, pues, si funciona rectamente, protege al ciudadano de lo discrecional, de los grupos de presión y del favoritismo. Se atreve a afirmar que la inmensa mayoría de los economistas están a favor del mercado, que consideran un simple instrumento y jamás un fin en sí mismo.

Ahora bien, los especialistas de otras ciencias sociales (filósofos, psicólogos, sociólogos, juristas, politólogos...), gran parte de la sociedad civil y la mayoría de las religiones tienen una visión diferente del mercado.

El inconveniente de la moral, en general, pero también cuando se aplica al ámbito económico, es que fluctúa con el tiempo, además de que puede llegar a tener una dimensión muy personal.

Tirole se adentra en el estudio de supuestos concretos, que analiza desde el punto de vista de la información disponible, las externalidades (el coste que un intercambio impone a un tercero) y las internalidades (cuando un individuo se comporta en contra de su propio interés).

La economía insiste en la necesidad de hacer que los objetivos individuales sean acordes con los objetivos colectivos, es decir, de armonizar al individuo con la sociedad, sobre todo mediante incentivos que desanimen los comportamientos dañinos para esta, como la contaminación, y, a la inversa, que animen a tener comportamientos socialmente responsables. Cree que las otras ciencias sociales no comparten este principio.

Algunos dilemas a los que se enfrentan los Estados y las sociedades son, por ejemplo, el gasto médico para salvar una vida cuando con ese mismo coste se podrían salvar muchas más, los casos de secuestro de ciudadanos en el extranjero cuando se exige un rescate para la liberación, la circulación —en un futuro más inmediato de lo que pensamos— de vehículos sin conductor, el tráfico de órganos o la prostitución.

Con las políticas, medidas e incentivos económicos adecuados, algunas de las controversias suscitadas podrían mitigarse.

Otra de las críticas al mercado es que con él se produce la pérdida del vínculo social. Ciertamente, el mercado provoca que las relaciones sean anónimas, pero, en parte, esa es su función.

Los que sienten inquietud ante el impacto del mercado sobre el vínculo social confunden a menudo, según Tirole, tres preocupaciones diferentes:

- El mercado fortalecería el egoísmo de sus actores, haciéndoles menos capaces de desarrollar vínculos afectivos hacia los demás (lo que se desmiente atendiendo a lo escrito por Adam Smith y, más cerca de nosotros, por Acemoglu).
- El mercado fomentaría que los ciudadanos se alejen de instituciones tradicionales, como sus pueblos y su gente, debilitando así sus vínculos con la sociedad que les rodea.
- El mercado permitiría a los ciudadanos pensar en algunas transacciones que, si no fuera por su misma existencia, serían inconcebibles, como vender sus órganos u ofrecer sus servicios sexuales, poniendo así ciertos aspectos de su intimidad al mismo nivel que unas simples negociaciones comerciales.

No parece que estas preocupaciones sean sólidas, ya que, como ha observado Paul Seabright, lejos de apoyarse únicamente en el egoísmo de sus participantes, el mercado les exige también una gran capacidad de establecer lazos de confianza. El mercado es un lugar de competición y de colaboración, y el equilibrio entre ambas facetas es siempre delicado.

También es cierto que el mercado facilita nuestra ruptura con ciertos vínculos tradicionales, pero se trata más bien de la transformación de unos vínculos heredados en otros elegidos que de la degradación del vínculo social sin más.

Todo ello lleva a Tirole a afirmar tajantemente que el mercado es en ocasiones el chivo expiatorio de nuestra hipocresía.

En cuanto a las desigualdades, no hay ninguna razón para que la actitud hacia los mercados dependa del nivel de desigualdad. Lo que sí es competencia de la economía es documentar las desigualdades, comprenderlas y sugerir políticas eficaces (que no dilapiden el dinero público) para obtener un nivel de redistribución determinado.

Tras citar a Thomas Piketty, se plantea por qué ha crecido tanto la desigualdad en nuestras sociedades, lo que obedece, primordialmente, al cambio tecnológico que favorece a las personas más cualificadas y con acceso a la llamada “economía del conocimiento”. En la economía digital, desde el prisma empresarial, se aprecia que rige el fenómeno “the winner takes it all” (el que gana se lo lleva todo), lo que no obsta a que los creadores de grandes empresas como Microsoft, Amazon, Google, eBay, Uber, Airbnb, Skype o Facebook se hayan enriquecido, pero, también, creado valor para la sociedad.

La globalización también incide en la desigualdad, ya que las empresas eficaces se ven beneficiadas al poder exportar pero las que lo son menos, al tener que enfrentarse a las importaciones, ven limitada su actividad.

En cuanto a los empleados de las empresas, sobre todo si son de un tamaño considerable, también ha hecho daño la conocida como “cultura del bonus”: para retener a sus empleados y atraer a los mejores, las empresas ofrecen retribuciones variables muy elevadas pero vinculadas al corto plazo, lo que origina que los menos escrupulosos olviden el largo plazo y, a veces, adopten comportamiento inapropiados.

Nuestras sociedades no dan muestra de generosidad hacia las generaciones futuras, a pesar de todos los discursos sobre el deseo de sostenibilidad de nuestras sociedades. Al contrario, nuestras actuales políticas están generalmente guiadas por el bienestar de las generaciones en edad de votar.

El economista en la sociedad

La impresión general que se tiene de los economistas es la de que permanecen en su torre de marfil o son “consejeros del príncipe”. Con esta percepción comienza el tercer capítulo de la obra.

El economista, cuando es investigador, realiza un trabajo en el que la motivación intrínseca es fundamental. Tirole admite que la inmensa mayoría de sus colegas están “locos por investigar”. Ante la ansiedad de la página en blanco, son muchos los momentos de auténtica emoción intelectual. Ya dejó escrito Poincaré que “el pensamiento no es más que un relámpago en medio de una larga noche, pero ese

relámpago lo es todo”. Gracias a la acción investigadora, lo que era confuso se convierte, de repente, en sencillo y lúmpido.

El investigador anhela tener a los mejores estudiantes, para ayudarles a superar las dificultades y aumentar su bienestar, y el reconocimiento de sus pares y de la sociedad. Mejorar su posición social y financiera es, igualmente, otra aspiración legítima. Se suele afirmar que los científicos no eligen investigar por razones financieras, y es cierto que muchos habrían podido ejercer profesiones más lucrativas y abrazan la carrera de investigador por afición personal.

Es inevitable que también aparezcan las motivaciones extrínsecas, que se pueden multiplicar dada la proximidad de la economía a su ámbito de aplicación concreta. El investigador podrá acceder a honorarios procedentes del sector público o del privado y a amistades ajenas al mundo académico, ser objeto del deseo de los medios de comunicación o incluso pretender tener influencia política.

Los profesores cuentan con los ingresos de su salario como funcionarios públicos, aunque los que tienen visibilidad internacional completan su retribución con otros ingresos: impartición de cursos y conferencias, puestos en universidades extranjeras, creación de “start-ups”, titularidad de patentes, asesoría privada y pública, escritura de libros, práctica profesional privada, comparecencias ante organismos reguladores, puestos en consejos de administración, publicación de artículos en prensa, etcétera.

Estos investigadores activos con una vida propia complementaria de la carrera universitaria son objeto de crítica con frecuencia, aunque Tirole no las comparte, en función de la utilidad social de estas tareas. Eso sí, admite que no se pueden ignorar algunos peligros, como, por ejemplo, la reducción del tiempo dedicado a sus cometidos principales, fundamentalmente a estudiar y a escribir artículos en revistas de primer nivel. Pero más peligroso que este descuido puede ser que el profesor incurra en “corrupción” en su actividad científica o en la “captura” por terceros.

En cuanto a la que denomina la “tentación mediática”, reconoce que los medios no son el hábitat natural del científico, cuyo ADN viene marcado por la duda, por argumentar y contraargumentar, lo que no suele ser tolerado por quienes necesitan formarse rápidamente una opinión. Y, por supuesto, dado que los conocimientos científicos evolucionan, es natural cambiar de opinión, un “pecado” que en la actualidad no se suele perdonar. La participación mediática obliga a opinar sobre temas ajenos al campo de especialidad (el “síndrome del premio Nobel”).

Acerca del llamamiento político, el Nobel de Economía comienza su reflexión con una cita a Platón y al intelectual comprometido (“intellectual engagé”) de la tradición francesa. La participación

del científico en el debate público le hace perder su utilidad social, al salir del contexto técnico que le es propio. Un segundo escollo, trascendental a nuestro parecer, es que, al comprometerse, el intelectual corre el riesgo de perder algo tan sagrado como es la libertad de pensamiento. Pone el ejemplo extremo pero llamativo de la ceguera, y luego de la negación de la evidencia, de muchos intelectuales y artistas franceses frente al totalitarismo, especialmente el de las experiencias soviética, maoísta y cubana. No sucumbieron a esta anormalidad intelectuales como Albert Camus o Raymond Aron... y la mayoría de los economistas famosos.

El templo del investigador, remacha, no es el del político, que vive bajo la amenaza de lo inmediato, bajo la presión de la sanción electoral.

La labor cotidiana del investigador

Tirole se plantea, siguiendo a Berlin, si los economistas son zorros o erizos. Realmente, esta expresión se atribuye al poeta griego Arquíloco: “Muchas cosas sabe el zorro, pero el erizo sabe una sola y grande”. La ciencia necesita a los dos.

Inicialmente, la toma de decisiones se basa en la hipótesis del comportamiento racional de los diversos agentes implicados, pero recientes investigaciones evidencian la existencia de comportamientos de racionalidad limitada, lo que influye en la forma de investigar y de formular hipótesis. Trae a colación, como ejemplo, la necesidad de las empresas de optimizar beneficios para contentar a sus accionistas. Se trata de un beneficio intertemporal actualizado, pues, con frecuencia, a una empresa le interesa sacrificar ganancias a corto plazo —por ejemplo, respetando la confianza de sus grupos de interés o gastando en equipamiento y mantenimiento— para acumular un beneficio a largo plazo. Esta tendencia podría ser contraria a la de unos directivos más interesados en el corto que en el largo plazo, lo que incide en las decisiones adoptadas.

Considera que el enfoque económico es el del “individualismo metodológico”, según el cual los fenómenos colectivos son resultado de comportamientos individuales y, a su vez, afectan a estos últimos. El “individualismo metodológico” es perfectamente compatible con la comprensión y el análisis preciso de los fenómenos de grupo.

Tras la formulación de una teoría esta se tendrá que someter a verificación. De existir una base de datos de cantidad y calidad suficientes, el primer recurso será el test econométrico, y, en su defecto, habrá que acudir a los trabajos de campo y a los experimentos en laboratorio. El recurso a las matemáticas es indispensable, no porque los economistas sea inteligentes, sino porque no lo son suficientemente, como asevera Dani Rodrik.

Se ha reprochado a los economistas su incapacidad para predecir acontecimientos con impacto negativo para la sociedad. Esto se debe a dos obstáculos,

comunes a otras ciencias sociales y humanas: el primero es la carencia de datos o la comprensión solo parcial del fenómeno analizado, y, el segundo, la imposibilidad material de predecir. Es más, el investigador, con sus predicciones, puede alterar la conducta de los sujetos implicados, dando lugar a las profecías autocumplidas o a los equilibrios múltiples.

Este capítulo llega a su fin con algunas reflexiones de Tirole sobre la teoría de juegos y la teoría de la información.

Entre los precursores de la teoría de juegos cita a John von Neumann, a Oskar Morgenstern y a John Nash. En las ciencias sociales y humanas las predicciones son importantes, y, especialmente, la comprensión de cómo el medio del agente va a evolucionar y a reaccionar ante sus decisiones: para jugar, un actor debe prever lo que harán otros actores. Estas predicciones son racionales si el actor comprende bien los incentivos de los demás actores y su estrategia (al menos, su promedio —equilibrio de Nash—).

Todos somos, sin saberlo, expertos en teoría de juegos, pues participamos a diario en miles de ellos. Tirole nos alerta sobre la “maldición del ganador”, pues se tiene tendencia a ganar la puja precisamente cuando el objeto posee poco valor. Como nos indica el “dilema del prisionero”, no es posible predecir a la perfección las actuaciones ajenas porque no estamos en posesión de toda la información, por lo que, como mucho, podríamos predecir comportamientos de modo condicional.

La teoría de la información (o de los incentivos, de los contratos, de la señal o del agente-principal) supone que no todos los actores tienen la misma información y, además, que algunos utilizan información privilegiada para alcanzar sus fines. Esta teoría desarrollada por aportaciones de, entre otros, Arrow, Akerlof, Spence, Stiglitz, Hurwicz, Maskin, Myerson, Holmström, Laffont y Milgrom, se elabora partiendo de dos conceptos:

- El riesgo moral, que hace referencia al hecho de que los comportamientos de un agente pueden no ser observables por la parte contratante a la que afecta el comportamiento del agente (el principal) o, en caso de litigio, por un tribunal encargado de hacer que se respeten los términos del contrato.
- La antiselección (o selección adversa), que se refiere a la posibilidad de que el agente disponga de información privilegiada en el momento de la firma del contrato entre las dos partes.

La economía en movimiento

Este capítulo comienza con una afirmación que el mismo Tirole califica como provocadora: la antropología, el derecho, la economía, la historia, la filosofía, la psicología, la ciencia política y la sociología no constituyen más que una única

disciplina, pues tienen los mismos objetos de estudio (personas, grupos y organizaciones).

Posiblemente, no todos los investigadores en ciencias humanas y sociales abrazan el principio de individualismo tan querido por los economistas, aunque es indispensable que los diversos campos de las ciencias humanas y sociales se abran unos a los otros y se alimenten entre sí.

Durante mucho tiempo, el “Homo economicus” se encarnó en un ser que tomaba decisiones conscientes sobre sus propios intereses e iba en pos de ellos de modo racional.

Sin embargo, es evidente que hay individuos que no actúan para el logro de sus propios intereses, como quienes procrastinan y dejan para más adelante las tareas desagradables, lo que ha llamado la atención de las neurociencias en relación con las decisiones intertemporales. Está comprobado que existe una tensión entre nuestra pulsión de gratificación instantánea y nuestro interés a largo plazo, que se rigen por diferentes partes del cerebro.

Tampoco se persigue el propio interés en las relaciones regidas por la empatía, cuando el sujeto es excesivamente optimista o cuando la decisión está condicionada por las emociones, la memoria selectiva o la automanipulación de las creencias.

La generosidad es un fenómeno complejo, que puede estar motivado por tres factores: la motivación intrínseca (somos natural y espontáneamente generosos), la motivación extrínseca (unos estímulos externos nos empujan a ser generosos) y el deseo de aparentar, de dar una buena imagen de sí, tanto a los otros como a uno mismo (por ejemplo, apenas un 1% de las donaciones a museos o universidades son anónimas).

Sin embargo, la especie humana tiene una importante particularidad, que es la cooperación en el seno de grupos significativos sin lazos genéticos. Las sociedades que tienen un nivel de intercambio considerable, más allá de la familia, parecen dar muestra de más espíritu cooperativo.

En cuanto al papel de la memoria, determinados experimentos muestran que el comportamiento inapropiado, cuando el individuo hace trampas, se puede atemperar si, previamente al experimento, se lee a los participantes un pretendido código ético: en este caso los participantes hacen muchas menos trampas. La lectura del código ético vuelve la trampa más patente y, por ello, es más difícil de reprimir en la memoria.

Se da la paradoja de que nos gusta, en general, la gente generosa, siempre que no lo sea demasiado, pues, finalmente, suelen terminar siendo ignorados por los demás. Algo parecido le ocurre a la gente demasiado honrada.

Los psicólogos y los filósofos han insistido desde hace siglos o milenios en la automanipulación de las creencias: los individuos casi siempre intentan reprimir, olvidar o reinterpretar las informaciones que les son desfavorables. El individuo se mentirá a sí mismo por tres razones: el miedo a una falta de voluntad y procrastinación futuras; la ignorancia del futuro y de sus aspectos negativos; y el consumo de creencias que tenemos sobre nosotros mismos.

En cuanto al “Homo socialis”, en el corazón de la vida económica y social está la confianza, aunque no siempre es necesaria. Todo individuo forma parte de grupos sociales y esos grupos afectan de forma diversa a su comportamiento. Defender la reputación colectiva implica un coste totalmente privado y un beneficio totalmente disperso, pues lo comparte toda la comunidad.

Por un Estado moderno

La posibilidad de que el Estado se vea cautivo de intereses particulares en detrimento del interés colectivo y de que, en un sistema democrático, la preocupación por ser elegido o reelegido prime sobre otras preocupaciones, han sido el fundamento mismo de la reflexión política desde Montesquieu hasta los padres fundadores de la Constitución de los Estados Unidos, pasando por todos los grandes constitucionalistas y por el propio Karl Marx.

La mayor parte de los Estados del mundo combinan la economía de mercado, visualizada en la “mano invisible” de Adam Smith, y la intervención del Estado. El Estado no puede lograr que sus ciudadanos vivan —correctamente— sin mercado; y el mercado necesita al Estado, no solo para proteger la libertad de empresa y para garantizar los contratos a través del sistema jurídico, sino también para corregir sus fallos.

Fue Arthur Pigou quien en la década de los años 20 del siglo pasado introdujo el concepto “quien contamina paga”. Ciertamente, la clave de bóveda del sistema es que los actores sean responsables del coste social de sus decisiones.

Hay pocas dudas en cuanto a los beneficios de la libertad económica, aunque se sabe, según lo indicado, que existen fallos de mercado, que se pueden clasificar en seis categorías:

- El intercambio puede afectar a terceros que, por definición, no han dado su consentimiento.
- El intercambio no puede efectuarse más que con total conocimiento de causa y con consentimiento.
- Puede que el comprador sea su propia víctima, que carezca de control sobre sí mismo y tenga un comportamiento impulsivo.
- La realización práctica de un intercambio puede superar la capacidad del individuo.

- Las empresas pueden disponer de poder de mercado, es decir, de la capacidad de hacer pagar a los consumidores precios muy superiores a los costes y ofrecer productos de mediocre calidad.

- Si bien el mercado es un factor de eficacia, no tiene ninguna razón para generar equidad.

Pero el Estado también puede fallar, pues, por ejemplo, cabe su “secuestro” por los grupos de presión.

Tirole presta atención a las autoridades independientes, que han proliferado en Francia —también en España— y han generado cierta controversia. A la autoridad independiente se le confía un mandato general en el seno del cual evalúa, encuentra soluciones técnicas y da muestras de independencia frente a los grupos de presión. Un inconveniente es que los grupos de interés más potentes financiera o mediáticamente puedan apropiarse de la voluntad del regulador. Aun así, las autoridades independientes son un instrumento que permite a la democracia mitigar un exceso de tentación electoralista y garantizar la independencia del Estado a largo plazo.

El Estado moderno se ha transformado, pues fija las reglas del juego e interviene para paliar los fallos de mercado y no para sustituirlo. De gestor de empresas más bien mediocre ha pasado a ser un regulador. Los funcionarios ya no están al servicio del Estado, sino del ciudadano.

Tirole propone reducir el número de funcionarios. La ampliación de los servicios públicos debería venir acompañada, en todo caso, de un aumento de los impuestos. También aboga por una reducción del número de parlamentarios y del incremento de sus asistentes técnicos. Señala que las fusiones administrativas —acaso también las privadas— deben ser motivo de ahorro y no una fuente de contrataciones y de mantenimiento de edificios adicionales de oficinas para coordinar unas instancias que no se han cambiado. Muchas de las reformas de éxito de las estructuras estatales (Canadá, Alemania, Suecia, Chile...) se han acometido por la izquierda, aunque las nuevas estructuras han sido respetadas en la alternancia de la derecha. Una coyuntura difícil como la actual no debe desalentar sino animar las reformas.

La empresa, su gobernanza y su responsabilidad social

La gobernanza capitalista, que es la más extendida, otorga el poder a los accionistas, que delegan el poder de administración en un equipo directivo que está mejor informado que aquellos.

Sin embargo, existen otras formas de gobernanza, como la gobernanza cooperativa o la de las empresas autogestionadas, que permiten la participación en la gestión de los trabajadores. Uno de los modelos más célebres es el de codecisión de Alemania, que permite

que las empresas se administren de forma dual por un directorio (ejecutivo) y por un consejo de vigilancia (no ejecutivo); los empleados deben alcanzar un tercio del consejo de vigilancia en una empresa de más de 500 asalariados, y la mitad si la empresa cuenta con más de 2.000.

La gobernanza no es neutra, pues está acreditado que cuando las empresas están sometidas a una representación equitativa, hay una reducción del valor de la empresa, más estabilidad de los salarios y del empleo, así como una tendencia, como reacción, a crear unos incentivos de los dirigentes más favorables a los accionistas.

La gobernanza debe garantizar a los accionistas (y a los demás inversores) los retornos esperados por su inversión. Los inversores se suelen beneficiar de una visión a largo plazo de la empresa, y, por ello, deben procurar tratar correctamente a los asalariados. Pero si los empleados tienen el poder, se deberá vigilar la retribución de los inversores. Las empresas que tienen más necesidad de capital tendrán tendencia a entregar el control a los inversores. Por tanto, un acuerdo sobre los objetivos es un factor importante para el buen funcionamiento de una organización, sea cual sea.

A los inversores les preocupa siempre hasta qué punto los directivos se comprometen a garantizarles una rentabilidad, pues estos disponen de mucha más información que los administradores y los socios.

Tirole no evita entrar en la espinosa cuestión de la retribución de los administradores, sobre todo en la variable, que tantas críticas ha recibido en los años de crisis. Opina que una retribución variable bien estructurada puede incentivar a los directivos a asumir una perspectiva a largo plazo. Basar la retribución variable en un reparto de acciones en lugar de pagarles un bonus en función de los resultados del año ya es una mejora. También alude a las cláusulas de reembolso (“*clawback*”).

Finaliza este capítulo con una referencia a la responsabilidad social de la empresa, merced a la cual hay que proteger a las partes interesadas que no controlan el proceso de decisión, para que los que sí lo controlan (los accionistas, los administradores y los directivos) no ejerzan demasiadas externalidades sobre ellas a la hora de tomar decisiones. Sin embargo, la protección de todas las partes es con frecuencia imperfecta; ni los contratos ni la regulación pueden preverlo todo, a lo que se une el problema del fallo del Estado. Un ámbito delicado es el de las empresas multinacionales que llevan a cabo actuaciones responsables, mientras que su política fiscal tiende a la máxima optimización.

Milton Friedman advirtió que las empresas no deben hacer caridad con el dinero de los accionistas, y que los directivos y administradores deben utilizar su propio dinero a ese efecto. Robert Reich sugiere que las empresas no deben sustituir al Estado. Para Tirole, la responsabilidad social de la empresa, la

inversión social responsable o el comercio justo no son incompatibles en absoluto con la economía de mercado.

El cambio climático

Nos encontramos ante una de las encrucijadas de nuestro tiempo. El coste del cambio climático será económico pero también geopolítico. A su vez, existe un legítimo deseo de un gran número de países de acceder a los estándares de vida occidentales. Los egoísmos nacionales priman sobre el imperativo ecológico, y ello nos conduce al inmovilismo, lo que es fruto de dos factores: el egoísmo frente a las generaciones futuras y el problema del parásito (“*free-rider*”), es decir, los beneficios de la atenuación del cambio climático siguen siendo fundamentalmente globales y a largo plazo, mientras que sus costes son locales e inmediatos.

Desde el punto de vista económico, el cambio climático se presenta como un problema de bien común. Además, los beneficios de las políticas que se habrían de adoptar no favorecerán a los actuales votantes, sino a las generaciones futuras. El problema del parásito lleva a la “tragedia de los bienes comunes”.

El Mecanismo de Desarrollo Limpio establecido en Kioto no parece ser suficiente, pues no es tan socialmente responsable como puede parecer. Únicamente un acuerdo global puede resolver el problema del clima. El protocolo de Kioto, afirma, es un fracaso. China, en 20 años, habrá emitido tanto dióxido de carbono como los Estados Unidos desde la Revolución Industrial.

Vencer al desempleo

Tirole, que vuelve a centrar su análisis en las políticas de empleo desplegadas en Francia, señala que los franceses sienten un profundo malestar en el trabajo, resultado de la falta de movilidad profesional, de unas relaciones conflictivas y de un sentimiento de inseguridad en el puesto de trabajo, lo que provoca un enorme gasto por parte del Estado.

Dos de los mayores problemas son la elevada tasa de desempleo y el paro de larga duración. Todos los países tienen un índice de paro superior entre los jóvenes que entre otros sectores de la población, lo que genera una gran desigualdad intergeneracional y dificultades para encontrar una vivienda por los más jóvenes.

Para eliminar el paro, los gobiernos de Francia y de otros países del sur de Europa, han fomentado los contratos temporales —contratos ultracortos, contratos para prestar servicios fijos discontinuos— y han financiado empleos subvencionados. En cuanto a los primeros, considera que no benefician ni al empleado ni al empleador, y, acerca de los segundos, que suponen un mal uso del dinero público, sobre todo respecto a los empleos subvencionados en el sector no mercantil.

La creencia de que hay que aferrarse a un trabajo ante el peligro de no volver a encontrar un empleo no facilita ni la movilidad ni la adecuación de los salarios a los puestos de trabajo, lo que impacta en los trabajadores pero también en las empresas. Las relaciones laborales, además, generan tensiones que contribuyen a que proliferen el estrés, la inseguridad profesional y el conocido como “síndrome del quemado” (“burn-out”) en los empleados.

El contrato de trabajo y los mecanismos de despido deben conciliar dos objetivos: el asalariado debe estar protegido ante el riesgo de que su puesto de trabajo se convierta en obsoleto o deje de ser rentable, mientras que la empresa exigirá tener flexibilidad en la gestión de los recursos humanos ante estos posibles impactos. Si la empresa no se encuentra “cómoda”, simplemente dejará de crear empleo, pues incurrirá en importantes pérdidas en caso de escasa productividad.

Según el principio de responsabilidad ya asentado en otros ámbitos, la empresa debería “internalizar” el coste total para la sociedad cuando despide a un asalariado, es decir, el coste para el asalariado y el coste para el sistema social. A ello hay que añadir que, en opinión de Tirole, para el caso de que el litigio llegue a los tribunales, el juez carece de la información necesaria que le capacita para suplantar al directivo de la empresa a la hora de juzgar la legitimidad de los “despidos económicos”: nuestras sociedades han confiado una misión imposible a los jueces de lo social y a los tribunales.

Otro aspecto a mejorar que identifica Tirole es que el empresario y el empleado han aprendido a transformar sistemáticamente una baja voluntaria en un despido. Como es sabido, la baja voluntaria no da derecho a percibir el subsidio de desempleo. Esta confabulación contra el sistema de seguro de desempleo no existiría si la empresa estuviera responsabilizada mediante un sistema “bonus-malus”. Además, habría que establecer mecanismos para incentivar el regreso al mercado de trabajo de los desempleados, como ocurre en los países escandinavos.

Flexibilizar el despido podría facilitar la desaparición del paro, pues, a la larga, las empresas serán más competitivas, lo que redundará en el bienestar laboral. Además, las ventajas para las finanzas públicas también serán evidentes.

Tirole certifica que los economistas condenan casi unánimemente el sofisma de la cantidad fija de empleo, un concepto según el cual el número total de empleos en una economía es fijo y, por tanto, hay que repartirlo equitativamente. Atribuye la autoría de esta idea a Thomas Malthus.

Los países más avanzados se enfrentan a un triple desafío: que las políticas sociales no sigan engordando el desequilibrio de las finanzas públicas; la inmigración y su impacto en el mercado laboral; la revolución digital, el emprendimiento y el

autoempleo, dado que la legislación laboral se centra en exclusiva en el trabajo por cuenta ajena.

Europa en la encrucijada

La construcción de Europa nos ha llevado de las esperanzas a las dudas. El mismo euro ejemplifica esta situación, a pesar de que, desde el principio, era evidente que no se reunían las condiciones necesarias para contar con una unión monetaria.

Un aspecto clave es la competitividad, que dista mucho de ser homogénea en todos los países de la Unión Europea. Esto origina desequilibrios que conducen al empobrecimiento de unos países a costa del beneficio de otros. La moneda única se convierte en un problema: si cada Estado dispusiera de su divisa, el marco alemán se habría revalorizado y el franco, la lira, la peseta o el dracma habrían perdido parte de su valor, factores que habrían coadyuvado a alcanzar un nuevo equilibrio.

La actual situación de desequilibrio se ha tratado de solventar con la devaluación fiscal y, particularmente, con la devaluación interna.

Un problema añadido ha sido el de la sostenibilidad de la deuda nacional, aunque lo que puede ser soportable en un país quizás no lo sea en otro. La sostenibilidad de la deuda depende de múltiples factores: el índice de crecimiento, si los títulos de deuda están en manos de inversores nacionales o extranjeros, el tipo de interés de la deuda, la capacidad recaudatoria y la existencia de margen para la subida de impuestos, la solidaridad entre países...

En cualquier caso, la medición de la deuda pública representa en sí misma un problema, pues numerosas partidas quedan “fuera de balance”, como ocurre con los pagos relacionados con las pensiones. Todos los gobiernos gastan mucha energía en ocultar la deuda pública bajo compromisos contingentes. La deuda soberana contraída por los Estados y la deuda privada contraída por los bancos deberían considerarse como un todo, merced al mutuo apoyo que se prestan en momentos de tensión.

Lo que es evidente es que los criterios del Tratado de Maastricht no han sido suficientes, como tampoco lo ha sido el principio de “no corresponsabilidad financiera”.

¿Qué opciones tiene Europa? La unión bancaria, que bien ejecutada lo cambiaría todo, es un embrión del federalismo. No obstante, no se puede retener soberanía y exigir una mayor compartición de los riesgos. A los países más estables no les interesa aportar más seguridad a los países con más riesgo. Un primer paso para una mayor solidaridad se dará cuando los ciudadanos se consideren a sí mismos como cercanos desde los puntos de vista cultural, lingüístico, religioso o racial, lo que obligará a los representantes políticos a modular sus decisiones. Si los europeos deseamos vivir bajo un mismo cielo, debemos aceptar la idea de perder un poco más de

soberanía, y, para lograrlo, debemos rehabilitar el ideal europeo y permanecer unidos en torno a él, lo que no es tarea fácil.

¿Para qué sirven las finanzas?

En este capítulo se desarrolla la visión de Tirole sobre las finanzas, en general, antes de adentrarse, en el siguiente, en el análisis de la crisis principiada en 2008.

Como otros recientes Premios Nobel de Economía (pensamos en Robert J. Shiller, por ejemplo), el profesor Tirole también subraya la necesidad de las finanzas para la organización de la sociedad. Las entidades financieras actúan, sobre todo, como intermediarios entre los agentes económicos excedentarios y los deficitarios.

La actividad financiera —la bancaria, en especial— es arriesgada, pues los intermediarios toman prestado a corto plazo y prestan a largo.

Últimamente, las entidades han comenzado a ofrecer derivados, los cuales pueden ser útiles para la sociedad, pues permiten neutralizar los efectos negativos de determinados acontecimientos. Sin embargo, es evidente que los derivados y las titulizaciones han estado en el ojo del huracán al estallar la crisis financiera, primordialmente por una asimetría de información y por las externalidades.

Ningún instrumento financiero es criticable en sí mismo, siempre que: a) las partes que lo utilicen comprendan bien el riesgo; y b) no se utilice para hacer pagar el riesgo a un tercero que desconoce a qué le expone la transacción financiera correspondiente.

Todos somos, hay que admitirlo, cada uno a su modo, especuladores. Esta especulación no merece un juicio negativo. Pero también existe una mala especulación, vinculada a la mera búsqueda de rentabilidad o a comportamientos claramente fraudulentos.

La idea de la eficiencia de los mercados es, en parte, cierta: una mala noticia sobre una empresa cotizada provoca la bajada del valor de la acción, a no ser que la noticia hubiera estado totalmente prevista y, por tanto, incorporada en el precio del activo. No obstante, es manifiesto que puede ocurrir que el precio de un activo financiero no se equipare a su valor.

El objeto de la regulación financiera es evitar comportamientos nocivos en los mercados financieros, protegiendo a los inversores de las manipulaciones y las estafas. La regulación prudencial, más en concreto, afecta a la intermediación financiera, y su objetivo principal es proteger el interés de los clientes poco informados, además de tratar de neutralizar el llamado riesgo sistémico.

La crisis financiera de 2008

En este capítulo Tirole ofrece su visión de la crisis, su origen y sus efectos. La crisis de 2008 ha demostrado que, ante unas mutuas exposiciones entre el sector regulado y el no regulado, una regulación laxa puede llevar a las autoridades a salvar a entidades que están fuera de la esfera regulada, por lo que este sector no regulado tiene acceso al dinero del contribuyente y a la liquidez de los bancos centrales sin tener que someterse a la disciplina de la supervisión prudencial.

Sobre los economistas estima que su capacidad para anticipar o minorar los efectos negativos de la crisis fue reducida. Los mejores fueron contratados por las empresas concernidas, como se muestra en el documental “Inside job”, y, por ende, se encontraron involucrados en un claro conflicto de intereses.

Para la difusión de los conocimientos científicos a la ciudadanía, debe ser bienvenida la experiencia de expertos de alto nivel en economía aplicada que no abracen la carrera universitaria, así como los trabajos de investigación y las conferencias organizadas con los actores del sector, reguladores, bancos centrales e instituciones financieras.

Política de la competencia y política industrial

La competencia no es un fin en sí misma, sino un instrumento al servicio de la sociedad. Su beneficio más evidente es la bajada de los precios para el consumidor, además de que empuja a las empresas a producir de modo más eficaz y a innovar.

Sin embargo, para Tirole, la competencia no siempre es buena, pues puede, a veces, duplicar los costes, como ocurriría, por ejemplo, si hubiera varias redes de suministro eléctrico o de transporte.

La solución consistiría, en estos casos, en admitir la existencia de un monopolio y en regularlo para limitar los precios y obligar a dar acceso a los operadores de la competencia, separando adecuadamente el servicio de la infraestructura para permitir una competencia justa.

La política industrial ha coadyuvado al progreso de ciertos sectores, particularmente tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. En la actualidad, los centros de desarrollo más innovadores y punteros (“clústeres”), surgen en el ámbito privado de modo espontáneo.

Cuando lo digital modifica la cadena de valor

Tirole reflexiona sobre la digitalización y la economía colaborativa, que facilita el acceso a los servicios y bienes, y la bajada de los precios. En esta nueva etapa los costes de transacción más pertinentes son los relacionados con la lectura de las ofertas y la selección de socios, y los costes de identificación. Otro papel clave lo desempeña la confianza en la

imparcialidad y en las recomendaciones para adquirir bienes o disfrutar servicios.

Un aspecto que preocupa al Nobel de Economía es el de la interoperabilidad entre las plataformas. En algunos ámbitos, como el de las telecomunicaciones, la cooperación está regulada. Sin embargo, hay plataformas que, deliberadamente, optan por no ser compatibles, citando los ejemplos de Visa y Mastercard o de Windows y Linux. Esto obliga a los usuarios a elegir entre varias plataformas o a estar presentes en todas ellas, lo que es antieconómico.

Economía digital: los desafíos para la sociedad

Es habitual que, al acceder a la red, las distintas páginas “web” nos obliguen a aceptar determinadas condiciones contractuales de uso, que Tirole califica como “contratos incompletos”, pues no podemos conocer con exactitud el riesgo al que nos exponemos. No se puede esperar de los usuarios que lean y acepten unos documentos complejos cada vez que se conectan a la red.

La protección del consumidor es tan importante aquí como en el comercio clásico, pues el Derecho debe proteger al ciudadano de las cláusulas que otorgan unos derechos desproporcionados al vendedor u oferente de servicios “on line”.

Un aspecto esencialmente sensible es el de la protección de los datos, especialmente en el sector de los seguros. En Francia, por ejemplo, la mitad de los gastos de sanidad procede de la atención dispensada únicamente al 5% de los asegurados. Se suele decir que “la información mata el seguro”, por lo que la mayoría de los sistemas sanitarios del mundo, ya sean públicos o privados, prohíben la selección de riesgos, al menos para el seguro básico. Al igual que ocurre en el sector financiero, podría ser que los competidores futuros de compañías aseguradoras como AXA, Allianz, Generali o Nippon Life sean Google, Facebook o Amazon.

La polémica que rodea a algunos nuevos proveedores, como Uber, en el sector de transportes, nos confirma, como ya ha ocurrido en otras épocas, que cualquier cambio tecnológico choca con las empresas ya establecidas, que no ven con buenos ojos la llegada de los nuevos competidores. Según Tirole, defender los intereses adquiridos no es una buena guía de la política pública. En el caso concreto de los taxis, afirma que los poderes públicos han cometido un grave error al otorgar a los particulares licencias de taxi gratuitas y después cerrar sus ojos ante la reventa, a pesar de que, por ser autorizaciones administrativas, no se pueden ceder.

Si se pretende crear empleos de calidad se necesitará una cultura y un contexto empresarial adecuados, así como universidades que puedan competir mundialmente.

No cree que el trabajo por cuenta ajena vaya a desaparecer, aunque los trabajadores serán cada vez

más independientes. Predice que lo laboral pasará de una cultura del control por la presencia a una cultura del control por los resultados, como ocurre con los asalariados ejecutivos, cuya asistencia es, además de secundaria, difícil de vigilar.

En la economía moderna, los empleados muy cualificados e innovadores seguirán llevándose la mayor parte de las ganancias. Los países que sepan atraer a estos mejores actores de la economía digital podrán entrar en la cadena de valor de todos los sectores y se apropiarán de inmensas riquezas, mientras que los demás se quedarán solo con las migajas.

Las personas que mejor se adaptarán al mundo nuevo serán las que hayan adquirido un conocimiento abstracto, mientras que las que estén en posesión de conocimientos sencillos que les capacitan para realizar tareas rutinarias tendrán muchas posibilidades de ser sustituidas por ordenadores.

Todo esto tendrá consecuencias para el sistema educativo, pues se correrá el riesgo de que la desigualdad vinculada al medio familiar y a la calidad de la educación aumente más todavía.

Sin embargo, como todos necesitamos vínculos sociales y tener un empleo es una forma de crear un tejido social, es posible que haya personas dispuestas a aceptar una retribución escasa a cambio de ese vínculo.

Innovación y propiedad intelectual

La propiedad intelectual (e industrial) origina controversias. El conocimiento generado será por lo habitual un bien público, que, una vez creado, puede ser utilizado por todo el mundo sin ningún tipo de exclusividad y a un coste prácticamente nulo. Por lo tanto, nos hallamos, de nuevo, ante el problema del “free-rider”. Si esta situación se extendiera nadie investigaría y todos esperarían a que otros hicieran el gasto en I+D. Por lo tanto, la propiedad intelectual es un mal necesario si se quiere estimular la I+D o la creación artística, pues procura un ingreso a su poseedor.

Tirole alude a los consorcios de patentes como ejemplo de “coopetición”, que es una combinación de “cooperación” y “competición”. Los propietarios de patentes se ponen de acuerdo para que cada uno modere sus “royalties” a fin de permitir que se desarrolle la demanda, aunque, a la contraria, también es posible que se produzca un aumento de los precios. Por tanto, hay consorcios buenos (los que generan la bajada de los precios) y los hay malos (los que provocan que los precios suban).

La innovación no está reservada a las élites instruidas. Algunos inventores del siglo XIX eran de origen modesto: Edison, Stephenson, Singer, Michelin... Algo similar ocurre con algunas de las grandes compañías tecnológicas, que también han tenido un origen relativamente humilde.

La regulación sectorial

El Estado productor ha pasado a ser un Estado regulador, que se centra en su papel de “juez” y árbitro como autoridad supervisora y de la competencia.

La apertura a la competencia provoca que emerja necesariamente el tratamiento que se debe dar, en la nueva situación, al operador histórico del sector de que se trate (transportes, telefonía, servicios financieros, etcétera). Se debe procurar, en general, que la empresa que facilita el acceso al mercado esté incentivada para continuar invirtiendo en la red correspondiente y para garantizar su mantenimiento.

Los consumidores con dinero subvencionan a los consumidores de escasos recursos. Unos compensan, pagando un precio superior a su coste, la diferencia entre el coste y el precio (inferior al coste) que pagan los consumidores de escasos recursos o que viven en zonas a las que cuesta más dar servicio.

Nos encontramos ante subvenciones cruzadas entre servicios o grupos de consumidores. En un medio competitivo, el mecanismo de financiación mediante subvenciones cruzadas favorece el “precio diferenciado” y deja de ser viable. Tirole cita a Atkinson y Stiglitz, que juzgan que, para evitar el paternalismo, es preferible redistribuir la renta mediante la fiscalidad directa que utilizar la fiscalidad indirecta o, lo que es parecido, las “subvenciones cruzadas”.

